

La consulta plantea si la apertura por el empresario de la correspondencia de los empleados recibidas en el domicilio de la empresa, para comprobar que no se usa dicho domicilio para asuntos particulares, puede suponer un incumplimiento de la normativa de protección de datos.

Para contestar a la consulta planteada deben hacerse las siguientes consideraciones en relación al derecho fundamental a la protección de datos personales:

El artículo 18.4 de la Constitución establece que *“La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos”*.

La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en desarrollo de lo previsto en el citado apartado 4 del artículo 18 de la Constitución, establece en su artículo 1 que *“La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.”*

La doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional ha conformado el derecho a la protección de datos personales como un derecho fundamental autónomo, diferenciado del derecho fundamental a la intimidad. Señala así dicho Tribunal en su Sentencia 292/2000 que *“La función del derecho fundamental a la intimidad del art. 18.1 CE es la de proteger frente a cualquier invasión que pueda realizarse en aquel ámbito de la vida personal y familiar que la persona desea excluir del conocimiento ajeno y de las intromisiones de terceros en contra de su voluntad (por todas STC 144/1999, de 22 de julio, FJ 8). En cambio, el derecho fundamental a la protección de datos persigue garantizar a esa persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado. En fin, el derecho a la intimidad permite excluir ciertos datos de una persona del conocimiento ajeno, por esta razón, y así lo ha dicho este Tribunal (SSTC 134/1999, de 15 de julio, FJ 5; 144/1999, FJ 8; 98/2000, de 10 de abril, FJ 5; 115/2000, de 10 de mayo, FJ 4), es decir, el poder de resguardar su vida privada de una publicidad no querida. El derecho a la protección de datos garantiza a los individuos un poder de disposición sobre esos datos.”*

La aludida Sentencia 292/2000 determina, asimismo, el contenido del derecho a la protección de datos personales señalando que *“De todo lo dicho resulta que el contenido del derecho fundamental a la protección de datos consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales*

*que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Estos poderes de disposición y control sobre los datos personales, que constituyen parte del contenido del derecho fundamental a la protección de datos se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular. Y ese derecho a consentir el conocimiento y el tratamiento, informático o no, de los datos personales, requiere como complementos indispensables, por un lado, la facultad de saber en todo momento quién dispone de esos datos personales y a qué uso los está sometiendo, y, por otro lado, el poder oponerse a esa posesión y usos.*

*En fin, son elementos característicos de la definición constitucional del derecho fundamental a la protección de datos personales los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus datos personales y a saber de los mismos. Y resultan indispensables para hacer efectivo ese contenido el reconocimiento del derecho a ser informado de quién posee sus datos personales y con qué fin, y el derecho a poder oponerse a esa posesión y uso requiriendo a quien corresponda que ponga fin a la posesión y empleo de los datos. Es decir, exigiendo del titular del fichero que le informe de qué datos posee sobre su persona, accediendo a sus oportunos registros y asientos, y qué destino han tenido, lo que alcanza también a posibles cesionarios; y, en su caso, requerirle para que los rectifique o los cancele.”*

Consecuentemente con dicha configuración del derecho a la protección de datos personales, la Ley Orgánica 15/1999, concreta su ámbito de aplicación en el artículo 2.1, disponiendo que “La presente Ley Orgánica será de aplicación a los datos de carácter personal registrados en soporte físico, que les haga susceptibles de tratamiento, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos por los sectores públicos y privados “.

Delimitado así el contenido del derecho a la protección de datos personales, la conducta a que hace referencia la consulta parece tener un mejor encaje en la protección del derecho al secreto de las comunicaciones proclamado en el artículo 18.3 de la Constitución según el cual “Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial” y respecto del cual, el Tribunal Constitucional ha señalado en la Sentencia 70/2002 “Rectamente entendido, el derecho fundamental consagra la libertad de las comunicaciones, implícitamente, y, de modo expreso, su secreto, estableciendo en este último sentido la interdicción de la interceptación o del conocimiento antijurídicos de las comunicaciones ajenas. El bien constitucionalmente protegido es así -a través de la imposición a todos del 'secreto'- la libertad de las comunicaciones,

*siendo cierto que el derecho puede conculcarse tanto por la interceptación en sentido estricto (que suponga aprehensión física del soporte del mensaje -con conocimiento o no del mismo- o captación de otra forma del proceso de comunicación) como por el simple conocimiento antijurídico de lo comunicado (apertura de la correspondencia ajena guardada por su destinatario, por ejemplo)... Y puede decirse también que el concepto de secreto que aparece en el art. 18.3, no cubre sólo el contenido de la comunicación, sino también, en su caso, otros aspectos de la misma, como la identidad subjetiva de los interlocutores o de los corresponsales (STC 114/1984, de 29 de noviembre, FJ 7)."*

*En consecuencia, teniendo en cuenta la distinta función y contenido de ambos derechos fundamentales, la apertura por el empresario de las cartas que el empleado recibe en el domicilio de la empresa, no guarda relación con las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, sin perjuicio de pueda constituir una vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones consagrado en el artículo 18.3 de la Constitución y cuya tutela no corresponde a esta Agencia de Protección de Datos.*